

Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintidós.

Visto:

Ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se sustanció la causa RIT O-1061-2021, caratulada “*BRICEÑO/CONSTRUCTORA SAE LIMITADA*”, sobre demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, sustanciada bajo las reglas del procedimiento de aplicación general.

Por sentencia definitiva de tres de diciembre de dos mil veintiuno, el juez de la instancia acogió la demanda deducida en cuanto se condena a Sociedad Constructora Echavarri Hermanos Limitada y, en forma subsidiaria, a Inmobiliaria Huinganal SPA, a pagar al actor: i) \$ 1.512.266 por remuneraciones adeudadas; ii) \$128.399 por feriado proporcional; iii) \$856.000 por indemnización sustitutiva de aviso previo. Por otro lado, condenó únicamente a Sociedad Constructora Echavarri Hermanos Limitada a pagar al actor las remuneraciones y demás prestaciones del contrato de trabajo entre la separación y la fecha en que se convalide el despido mediante el pago de las cotizaciones de seguridad social adeudadas, a razón de una remuneración mensual ascendente a \$856.000.

Contra este fallo la parte demandante dedujo recurso de nulidad haciendo valer la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley en relación con los artículos 162, 183 A, 183 B, 183 C y 183 D, todos del Código del Trabajo. Solicitó invalidar el fallo, y acto seguido se dicte la correspondiente sentencia por la que se condene a la demanda Inmobiliaria el Huinganal de forma solidaria, extendiendo la condena a la sanción de nulidad del despido, con costas.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista el 12 de julio del 2022, oportunidad en que alegaron los apoderados de las partes.

Considerando:

Primero: Que, por la causal del artículo 477 del Código del Trabajo la parte demandante alega infringidos los artículos 162, 183 A, 183 B, 183 C Y 183 D, todos del mismo cuerpo legal, impugnando la sentencia en cuanto condenó sólo en forma subsidiaria a la demandada Inmobiliaria Huinganal, y no de manera solidaria; y en segundo lugar, por no haber extendido la sanción de la nulidad del despido a la demandada solidaria, o la empresa principal en régimen de subcontratación, existiendo un error porque no se acreditó que la demandada Huinganal haya hecho uso del derecho de información y retención que la facultaría para tener una condena subsidiaria, lo mismo al no extender la sanción de la nulidad del despido, pues ella se generó por un hecho ocurrido durante la ejecución de la relación laboral. El tribunal debería haber considerado procedente



la condena solidaria de todos los rubros demandados, en atención a lo dispuesto en el artículo 183-B del Código del Trabajo, que contempla las obligaciones laborales y previsionales e indemnizaciones que correspondan por el término del contrato de trabajo.

La nulidad del despido es una “*sanción*” que no excluye que sea igualmente una indemnización originada con ocasión del término de la relación laboral, ya que se genera por haberse efectuado el despido en contravención a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, y el resultado es justamente una prestación en dinero en favor del trabajador, siendo una sanción de carácter indemnizatoria, porque es una de las obligaciones que corresponde cumplir a la empresa principal al tenor de lo dispuesto en el artículo 183-B del Código del Trabajo, citando variada jurisprudencia en su favor, concluyendo que la correcta interpretación de las normas en análisis es aquella que determina que la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo es aplicable a la empresa principal, en el contexto del régimen de subcontratación, sin que pueda asilarse en el límite previsto en el artículo 183 B del mismo Código. El vicio denunciado influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, porque de no haber mediado éstos, habría llevado al tribunal a condenar a la demandada Inmobiliaria Huiganal de forma solidaria, y además extendido a la condena por la sanción de nulidad del despido.

Segundo: Que la causal de infracción de ley del artículo 477 del Código del Trabajo, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos asentados en la sentencia, por lo que para determinar la procedencia de las prestaciones laborales que pide el recurrente, y la influencia en lo dispositivo del fallo, se hace necesario analizar en primer lugar, si efectivamente el fallo impugnado establece el sustrato fáctico que permita aplicar e interpretar correctamente las normas legales que se alegan vulneradas.

Tercero: Que, respecto a la alegación de haberse condenado sólo en forma subsidiaria a la demandada Inmobiliaria Huiganal, y no de manera solidaria como pide el recurrente, la sentencia el considerando sexto señala que *“La Inmobiliaria ha admitido que los servicios del demandante eran prestados en régimen de subcontratación a su favor, como se sigue, además, de la documental aportada por las partes, consistente en el contrato comercial entre las demandadas y sus documentos anexos, y haber ejercido su derecho de información durante tal periodo, según los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales rendidos por ella. Luego, conforme a lo previsto por los artículos 183-B y 183-D del Código del Trabajo, será responsable subsidiaria del pago de la indemnización*



sustitutiva del aviso previo, las remuneraciones adeudadas y el feriado proporcional”.

Cuarto: Que, conforme a lo anterior, la sentencia recurrida además de establecer la existencia de un régimen de subcontratación, se fundó para hacer responsable de manera subsidiaria de la demandada Huinganal, en la circunstancia fáctica de haber verificado ésta sólo el derecho de información, pero no señala que haya cumplido además, el deber de retención. Contrario a tal consideración, el artículo 183 D del Código del Trabajo, exige que se verifique el cumplimiento de ambas obligaciones, señalando que *“Si la empresa principal hiciera efectivo el derecho a ser informada y el derecho de retención a que se refieren los incisos primero y tercero del artículo anterior, responderá subsidiariamente”*. En consecuencia, no siendo un hecho establecido en la sentencia, que la demandada Huinganal además de ejercer el derecho a ser informada, haya hecho efectivo el derecho de retención, que le habría permitido desplazar su responsabilidad a una menor, de tipo subsidiaria, existe la infracción de ley que alega el recurrente. En efecto, el derecho a información es funcional a un propósito, verificar que la empleadora esté dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y previsionales, de manera que si ello no es así –como aconteciera en la especie-, pues entonces surge el deber de la dueña de la obra de retener los pagos respectivos a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Quinto: Que, en lo que respecta a la nulidad del despido, la sentencia en los considerandos primero y segundo, establece que el trabajador si bien ingresó a trabajar el 04 de agosto de 2020 en virtud de un contrato de plazo fijo, éste se renovó para derivar en uno de duración indefinida, que terminó por despido injustificado el día 23 de noviembre de 2020, señalando posteriormente en el considerando tercero que *“El certificado de cotizaciones aludido, de AFP Modelo, y los oficios de Fonasa y AFC Chile, comprueban que, efectivamente, se adeudan periodos completos al actor, aun cuando la Inmobiliaria ha demostrado haber pagado algunos de ellos, especialmente noviembre de 2020. De este modo, según prescriben los incisos cuarto a séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, procede el pago de remuneraciones y prestaciones entre el despido hasta su convalidación mediante el pago de lo adeudado, a razón de la cantidad que como remuneración se ha establecido precedentemente”*.

Sexto: Que, si bien la sentencia condena a la empresa contratista a esta prestación, exime a la empresa principal, Inmobiliaria Huinganal SPA, porque en su concepto su obligación de garantía no abarca aquellas *“obligaciones de dar*



que surjan después de la fecha de expiración de los servicios ni a reparaciones cuya causa sea ajena a esta expiración”, interpretando restrictivamente el artículo 183 B del Código del Trabajo, señalando que aplica solo respecto a las indemnizaciones “que la ley laboral contempla, fundamentalmente, en los artículos 161 y siguientes del Código del Trabajo, esto es, las denominadas sustitutiva del aviso previo, por años de servicios y los recargos correspondientes, aunque también cabe incorporar aquí la compensación de los feriados prevista en el artículo 71 y las demás que consagran los estatutos especiales”.

Séptimo: Que, para determinar la procedencia de la nulidad del despido que reclama el recurrente, corresponde considerar que la sentencia efectivamente estableció que se adeudan cotizaciones previsionales al trabajador, señalando a este respecto que *“se adeudan periodos completos al actor, aun cuando la Inmobiliaria ha demostrado haber pagado algunos de ellos, especialmente noviembre de 2020.* Frente a este sustrato fáctico establecido, es aplicable el artículo 183 B del Código del Trabajo, que hace responsable a la empresa principal, y además solidariamente –cuando no cumple las obligaciones de información y retención- de las obligaciones laborales y previsionales, agregando como restricción, que esta responsabilidad sólo *“estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal”.*

Octavo: Que, más que estarse a los alcances de una *“obligación de dar”*, cuya regulación es más propia del derecho civil, debe considerarse la especialidad del derecho del trabajo, el que establece obligaciones que se imponen de manera imperativa a las partes, por lo que lo determinante para establecer la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, es que las cotizaciones previsionales que la sentencia ha determinado se adeudan al trabajador –lo que deviene en el efecto de la nulidad del despido-, se originaron en el período en que la empresa principal se encontraba obligada respecto del mismo por un régimen de subcontratación, hecho que también se ha establecido. Si la empresa principal tiene la obligación de ejercer el derecho a información y retención, estuvo en condiciones de hacer valer éstos como una potestad respecto de la empresa contratista, para que cumpliera esta obligación previsional insoluta.

Por consiguiente, esta Corte comparte a la abundante unificación de jurisprudencia que cita el recurrente, que señala que la correcta interpretación es aquella que determina que la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo es aplicable a la empresa principal, sin que pueda asilarse para eximirse de ésta, en el límite previsto en el artículo 183 B del mismo Código



Noveno: Que, en consecuencia, habiéndose verificado la infracción de ley, que hacen procedente las prestaciones que se reclaman, por lo que el vicio incluye en lo dispositivo de la sentencia, se acogerá el recurso de nulidad.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, **se acoge el recurso de nulidad** deducido por la parte demandante en contra de la sentencia de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dictándose acto seguido y sin nueva vista de la causa, la sentencia de reemplazo que sigue.

Redacción del Fiscal Judicial Sr. Jorge Luis Norambuena Carrillo, quien no firma, por estar en comisión de servicios.

Regístrese y comuníquese.

Laboral-Cobranza N° 4088-2021.-

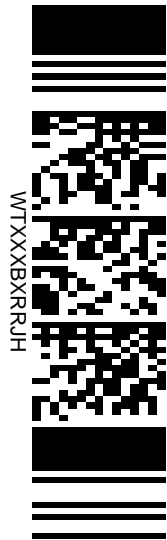
OMAR ANTONIO ASTUDILLO
CONTRERAS
MINISTRO
Fecha: 09/09/2022 13:54:22

LILIAN ATENAS LEYTON VARELA
MINISTRO
Fecha: 09/09/2022 14:11:32



Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C., Lilian A. Leyton V. Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a nueve de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintidós.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Visto:

De la sentencia anulada se mantienen sus consideraciones, y citas legales, con excepción del párrafo segundo del motivo sexto, y los considerandos octavo a décimo primero, que se eliminan y se tiene además, y en su lugar presente.

1°.- Se reproducen los fundamentos tercero a octavo del fallo de nulidad que antecede.

2°.- Que, se mantendrán las demás prestaciones que ha otorgado y rechazado el fallo anulado, que por no haber sido objeto del recurso de nulidad acogido, no han podido ser afectadas por la nulidad de la sentencia.

Por estas consideraciones, las disposiciones citadas y aplicables y lo previsto en los artículos 453 y siguientes del Código del Trabajo, **se declara:**

1.- Se acoge la demanda deducida en cuanto se condena:

a) A Sociedad Constructora Echavarri Hermanos Limitada y, en forma **solidaria**, a Inmobiliaria Huinganal SPA, a pagar al actor:

i) \$ 1.512.266 por remuneraciones adeudadas.

ii) \$128.399 por feriado proporcional.

iii) \$856.000 por indemnización sustitutiva de aviso previo.

b) Se condena además a Sociedad Constructora Echavarri Hermanos Limitada **y a la demandada solidaria Inmobiliaria Huinganal SPA** a pagar al actor las remuneraciones y demás prestaciones del contrato de trabajo entre la separación y la fecha en que se convalide el despido mediante el pago de las cotizaciones de seguridad social adeudadas, a razón de una remuneración mensual ascendente a \$ 856.000.

2.- Las cantidades señaladas se deberán con los reajustes e intereses previstos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo sobre esas cantidades.

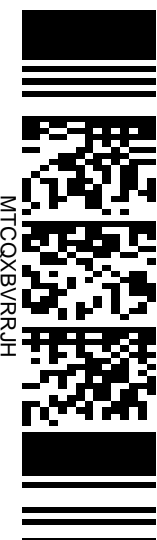
3.- Se ordena notificar el presente fallo a las entidades de seguridad social respectivas para el ejercicio de las acciones pertinentes, con arreglo a lo previsto en el artículo 461 del Código del Trabajo.

4.- Se rechaza en lo demás pedido la demanda.

5.- Se condena a las dos demandadas a pagar las costas del actor, las que se regulan en \$400.000.

Redacción del Fiscal Judicial Sr. Jorge Luis Norambuena Carrillo, quien no firma, por estar en comisión de servicios.

Regístrese y comuníquese.



Laboral-Cobranza N° 4088-2021.-

OMAR ANTONIO ASTUDILLO
CONTRERAS
MINISTRO
Fecha: 09/09/2022 13:54:24

LILIAN ATENAS LEYTON VARELA
MINISTRO
Fecha: 09/09/2022 14:11:37



Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C., Lilian A. Leyton V. Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a nueve de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

